

LA UNIDAD LATINOAMERICANA

A DOSCIENTOS AÑOS DE LA INDEPENDENCIA

Nils Castro

¿Y han de poner sus negocios los pueblos de América en manos de su único enemigo, o de ganarle tiempo y poblarse, y unirse, y merecer definitivamente el crédito y respeto de naciones, antes de que ose demandarles sumisión el vecino...?

José Martí, 1889

En febrero de 2021, el presidente argentino Alberto Fernández, en visita oficial a México, le propuso a su colega Andrés Manuel López Obrador activar un nuevo eje de integración latinoamericana. “Que el continente cambie no depende de otros, depende de nosotros” —señaló Fernández—. “América Latina tiene un futuro y ese futuro pasa por la unidad de los esfuerzos”, añadió, para plantear: “Desde el país más norteño de la América Latina hasta el más austral tenemos que ser capaces de trazar un eje que una a todo el continente”.

Entre otras iniciativas, acordaron impulsar la colaboración entre sus naciones en varios campos, como la producción conjunta de vacunas contra el Covid-19, para hacerlas más accesibles a los países de la región. Fernández y López Obrador ya habían demostrado esa vocación solidaria en noviembre del 2019, cuando colaboraron para rescatar con vida al recién depuesto Evo Morales.

Al asumir que el destino de nuestros pueblos “depende de nosotros”, ambos líderes replantearon —a despecho de los ex-abruptos imperiales del aún presidente Donald Trump— la decisión de reanudar el histórico proceso de convergencia latinoamericana y caribeña. Cosa que poco antes parecía impensable, cuando ambos países aún estaban aislados por sus anteriores gobernantes. El reclamo de continuar ese proceso tiene larga trayectoria, como también la tienen los esfuerzos neocoloniales para separar y subordinar a nuestras naciones.

Esa demanda viene desde el propósito republicano de las luchas por la independencia de las colonias hispanoamericanas. Enseguida de constituirse las jóvenes

repúblicas, se expresó en los esfuerzos por confederarlas, desde el Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por Bolívar en 1826, hasta los congresos de Lima en 1847, Santiago en 1856 y nuevamente Lima en 1864, donde se firmó el Tratado de Liga y Confederación de los Estados. La prioridad de esos pactos era unir fuerzas contra cualquier nuevo intento de reconquista colonial europea, y cooperar en el mejoramiento de las comunicaciones y el desarrollo mutuos.

Durante ese mismo período, la ambigua Doctrina Monroe (1823), la anexión de Texas (1845), la declaración del Destino Manifiesto (1845) y la Guerra contra México en 1847, para conquistar California y las demás provincias del norte del país, también dejaron claro algo más: que Estados Unidos, amén de ser un interesante ejemplo de democracia, constituía una amenaza para sus vecinos de Mesoamérica y el Caribe. No obstante, durante los años de la Guerra de Secesión (1861-65) y del reordenamiento interno que la siguió, Estados Unidos debió volcarse en sus prioridades intestinas. Francia lo aprovechó para invadir México (y los mexicanos no sólo los rechazaron, sino realizaron la Reforma liderada por Benito Juárez). Acontecimientos que a América Latina le confirmaron dos hechos: uno, que las demás potencias europeas tampoco eran de fiar y, otro, que cuando Washington se veía en problemas era el momento oportuno para avanzar en la unidad y autodeterminación latinoamericana, e impulsar nuestros propios cambios.

Sin embargo, enseguida que Estados Unidos superó aquel conflicto interno, reanudó su proyecto hemisférico. En 1889 convocó a los demás países del continente a la Primera Conferencia Interamericana y creó la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas —antecedente de la Unión Panamericana y de la OEA—, dirigida por el Secretario de Estado para regular las relaciones comerciales y aduaneras con todos ellos. Ávidas de acceso al mercado estadounidense, las jóvenes repúblicas latinoamericanas se plegaron. José Martí fue el más lúcido crítico de esa Conferencia, advirtiendo de la naturaleza imperialista de la iniciativa. Diez años después, en 1898, Washington provocó la Guerra Hispanoamericana, que le permitió apropiarse de las colonias de la agónica Corona

de España, desde las Filipinas y Guam en el Pacífico hasta Cuba y Puerto Rico en el Caribe. Los objetivos liberadores de los insurgentes filipinos, cubanos y boricuas se vieron frustrados. En los siguientes años, como Martí lo previera, la proyección hegemónica norteamericana desplegó la política del Gran Garrote y la Marina estadounidense constituyó la última palabra en las relaciones hemisféricas. Desde ese momento, en el Continente el proyecto de integración se escindió entre dos polos: el representado por la Oficina Comercial anunciada en Washington —devenida en el *proyecto neocolonial “panamericano”*, cuajado en la OEA—, contra el del ideal y el propósito latinoamericanista de *unidad e integración para la emancipación y el desarrollo autodeterminado*.

Primera ola nacional-desarrollista

Durante la primera mitad del siglo XX, este propósito latinoamericano se renovó a través de la aspiración de robustecer la identidad y cooperación de nuestra América, asumida por los grandes movimientos pluriclasistas de la época, tan diversos como el nacionalismo revolucionario mexicano y el laborismo popular suramericano, encabezados por Lázaro Cárdenas, Getulio Vargas y Juan Domingo Perón, a los que se alude como puntales del llamado “populismo” latinoamericano. Ese populismo alcanzó su mayor visibilidad en los años en que la amenaza fascista y la guerra en Europa refrenaron las ambiciones neocoloniales europeas y las pretensiones estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe. En ese período, luego del embate de la Gran Depresión, la política intervencionista del Gran Garrote fue atemperada por las del *New Deal* y el Buen Vecino norteamericanos. En los años 40, durante el lapso democrático abierto por la guerra contra el fascismo y la primera etapa de la reconstrucción europea, la vocación latinoamericanista también emergió en las movilizaciones democratizadoras, antioligárquicas y nacional-reformadoras que reanimaron al ambiente latinoamericano en los primeros años de la posguerra.

Pero, concluida esa fase, el contexto mundial cambió. Tan pronto como la reconstrucción de Europa y Japón avanzó lo bastante para estabilizar, bajo paraguas estadounidense, esas partes del mundo, habilitándolas como aliados capaces tanto de sojuzgar cualquier socialismo nativo como de ayudar a contener una presunta expansión del campo de dominio soviético, Estados Unidos y sus principales aliados (y deudores) de ultramar entronizaron las políticas militares, civiles y mediáticas de lo que se llamó la Guerra Fría. Y bajo esa lógica, Washington reeditó su política panamericana. Su principal instrumento político e ideológico fue el anticomunismo, y su primer paso fue la reanudación de las Conferencias Interamericanas, suspendidas durante la guerra. Así, en 1946 se procedió a constituir el TIAR, el tratado que

impuso la articulación militar de nuestros países con Estados Unidos para la defensa del Continente contra alguna eventual agresión “extracontinental”. Y en 1948 pasó a fundar la OEA. Su implementación debió sortear cierta resistencia, remanente de las ideas democráticas que caracterizaron al periodo inicial de la posguerra. Durante la redacción de la Carta de la OEA, los delegados latinoamericanos aún pudieron salvaguardar algunos derechos soberanos. No obstante, la hegemonía estadounidense iba a imponerse no mucho después, cuando en 1954 la X Conferencia Interamericana se dedicó a acordar medidas contra la “propaganda y actividades subversivas” —imputables a procomunistas o socialistas— en el continente americano.

Con el macartismo reinando en Estados Unidos y la dominación regional norteamericana estructurándose en cada uno de nuestros países a través de sus respectivos cómplices oligárquicos, se cerró la opción ciudadana de reclamar pacíficamente mayores reformas democráticas o socioeconómicas, lo que pronto motivaría insurrecciones nacional-liberadoras más radicales, como las de Puerto Rico en 1950, Bolivia en 1952 y Guatemala en 1951-54, a las que poco después siguió la Revolución Cubana, en 1959. Ello serviría de pretexto para relanzar el intervencionismo y auspiciar otros regímenes dictatoriales, como instrumentos de control del Hemisferio en las nuevas condiciones mundiales. Sobre esto es muy ilustrativo el papel de la OEA como “Ministerio de Colonias de los Estados Unidos”, como la calificó Raúl Roa. Ese fue el caso de la condena al gobierno guatemalteco de Jacobo Árbenz en 1954, de la aprobación de la Carta de Punta del Este para apoyar la instauración continental de la Alianza para el Progreso y, en 1962, la expulsión de Cuba de ese organismo continental, seguida en 1965 por el aval “panamericano” a la intervención militar estadounidense en República Dominicana e impedir la revolución democrática de ese país.

El período desarrollista

Tras la experiencia del populismo latinoamericano, otra alternativa encontró salida democrática a través del desarrollismo de finales de los años 50 a inicios de los 80. Bajo los efectos de la posguerra, algunos sectores estadounidenses y latinoamericanos se interesaron en una modernización capitalista de nuestros países. A eso contribuyeron las concepciones y experiencias del *New Deal* aplicadas en las reconstrucciones de posguerra. Con la influencia de la recién creada Comisión Económica para América Latina (CEPAL), constituida por la ONU en 1948, fue posible promover un proyecto regional en el cual el Estado asumiera un papel interventor en la economía, con una estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones y protección del crecimiento de la industria

nacional frente a la competencia foránea, gravando las importaciones, así como medidas dirigidas a planificar el desarrollo, mejorar la distribución de la riqueza, fomentar grandes obras de infraestructura e impulsar reformas agrarias, junto con la normación de las inversiones extranjeras y actividades empresariales, ideas que hasta entonces habían sido reprimidas como “procomunistas”.

Con el liderazgo de Raúl Prebisch y un grupo de economistas latinoamericanos, el cepalismo constituyó una variante criolla del keynesianismo y tuvo el efecto de que la mayor parte de los países de la región compartieran una doctrina socioeconómica común, orientada a la modernización y estabilización capitalista de la economía y la sociedad. En plazo relativamente corto se avanzó en cierta industrialización, se incrementó la explotación de recursos nacionales antes limitada por falta de financiamiento, se fortaleció el patrimonio nacional, se amplió el mercado interno y el consumo popular, se fortalecieron las capacidades nacionales de comunicaciones y transportes, a la vez que se mejoraron las legislaciones laborales y los servicios públicos. En ese contexto aparecieron varios organismos regionales dirigidos a la cooperación e integración regional, como es el caso del Parlamento Latinoamericano (el Parlatino), la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc), convertida después en la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), así como la Comunidad Andina y el Mercosur.

Más tarde, la Alianza para el Progreso —estrategia concebida en Washington para contrarrestar la influencia revolucionaria cubana en Latinoamérica— tomaría para sus propios fines algunas ideas de la CEPAL, lo que contribuyó a hacerlas ver como opciones admisibles, pese a la resistencia reaccionaria de las oligarquías atadas a formas más primitivas de la explotación capitalista tradicional, que las rechazaban como “izquierdistas”. Ciertos proyectos, como los de reforma agraria y otros planteados por la burguesía industrial, encontraron mayor rechazo de la elite conservadora, incluso se apeló a impedirlos por medios autoritarios, como los gobiernos militares de Ecuador en 1963 y de Brasil en 1964. Algunas ideas del desarrollismo se reflejaron en ciertas versiones criollas de la llamada “doctrina de seguridad nacional”, útiles para contribuir a la paz social fomentando un orden interno socialmente más aceptable, sin apelar a intervenciones foráneas.

En determinados países eso derivó en un nacionalismo reformador asumido por algunos líderes militares, como en los movimientos encabezados por los generales Juan Velasco Alvarado en Perú (1968 al 75), Omar Torrijos en Panamá (1970 al 81) y Juan José Torres en Bolivia (1970-71), de quienes unos años después Hugo Chávez sería admirador. Estos optaron por fortalecer la soberanía y

autodeterminación nacionales frente al hegemonismo neocolonial de las potencias dominantes, impulsar reformas estructurales destinadas a promover el desarrollo, como medio para solucionar las principales causas de descontentos sociales en vez de reprimirlos, así como adoptar políticas exteriores afines a las del Movimiento de los Países No Alineados.

La estrategia cepalista de reservarle el mercado interno de cada país preferentemente al desarrollo de la industria nacional, pronto llevó a procurar mercados, proyectos e inversiones de mayores dimensiones, lo que condujo a integrar bloques subregionales de países vecinos, asociados mediante la adopción de aranceles y políticas de desarrollo comunes frente a las demás naciones o grupos no pertenecientes a sus respectivos bloques. Ello implicó constituir bloques de países vecinos que, en la mayoría de los casos, tuvieron un desenvolvimiento económico solidario y más sinérgico, como la Comunidad Andina, la Caricom, el Mercosur, así como, en cierto grado la Organización de Desarrollo Económico Centroamericano (ODECA), que luego pasó a ser el Sistema de la Integración Centroamericana (Sica). Cada uno de esos grupos iría asumiendo, a su vez, otros ámbitos de integración a nivel político, como el de sus parlamentos subregionales, así como en los campos educativo, sanitario, de turismo y de seguridad, así como en proyectos comunes de comunicaciones, transportes y energía, entre otros. A lo que se añadió la constitución de organismos regionales de integración, como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc), después convertida en la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).

En general, el desarrollismo cepalista propició fortalecer el papel del Estado en la orientación de la economía, planificar el desarrollo y la creación —o nacionalización— y fortalecimiento de industrias e infraestructuras básicas. Y con esto, a robustecer tanto la identidad como la voluntad de autodeterminación de las respectivas naciones o grupos subregionales. En el campo económico y político la formación de esos bloques, en los que participaban gobiernos de distintas filiaciones político-ideológicas, fue durante una significativa etapa el logro de mayor alcance institucional y práctico del proceso latinoamericano de unidad e integración.

Emersión y agonía del Grupo de Río

Ya en el crepúsculo de aquel período, todavía apareció otra concurrida agrupación latinoamericana y caribeña, de origen ajeno al cepalismo y de carácter político-diplomático: el Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, más conocido como el Grupo de Río. Este tuvo origen en la iniciativa de



Nueva York, 21 de Junio 1983, Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuellar (centro) se reúne con miembros del Grupo Contadora: Bernardo Sepulveda Amor de México (izquierda) y Rodrigo Lloreda-Caicedo de Colombia (derecha).

Contadora, creada en 1983 por los presidentes de Panamá, México, Colombia y Venezuela, que la emprendieron para buscarle solución a los conflictos que estaban en curso en la mayor parte de los países centroamericanos. Lo crearon con dos objetivos principales: uno, gestionar en consulta con sus principales actores locales, los términos de la negociación política de reformas estructurales capaces de resolver esa cruenta situación. El otro, evitar que Estados Unidos interviniese militarmente en la zona, lo que agravaría los problemas hasta extremos tanto más peligrosos. El interés estadounidense radicaba en destruir la joven revolución nicaragüense e impedir que las guerrillas de El Salvador y de Guatemala pudieran llevar a los revolucionarios al poder y crear “otra Cuba” en el istmo centroamericano. El interés de los integrantes del Grupo de Contadora fue procurar una solución latinoamericana que superase las causas de conflicto sin intervención foránea. Al avanzar la gestión negociadora en los cinco países de Centroamérica, otros gobiernos sudamericanos irían decidiendo apoyar política y diplomáticamente al Grupo, ampliándolo a ocho y luego a doce “Amigos de Contadora”, liderados por los cuatro integrantes originales. Resuelto ese reto a través de los acuerdos de paz, democratización y desarrollo que los cinco gobiernos centroamericanos suscribieron en Esquipulas, en 1986, esa colectividad de doce naciones latinoamericanas optó por constituirse en Grupo regional de consulta y coordinación política, donde discutir los grandes temas de interés regional e internacional, como los procesos de democratización de los países latinoamericanos aún sujetos a dictaduras, y la crisis de la deuda externa, entre otros, con vistas a adoptar posiciones comunes como grupo latinoamericano y caribeño.

La experiencia del Grupo de Contadora reveló hasta dónde, en aquellos años, ya se había desarrollado en América Latina y el Caribe, a nivel gubernamental, una voluntad política autodeterminada y solidaria, capaz de oponerse a la política intervencionista estadounidense. Pero esa política imperial ya venía resurgiendo de nueva cuenta, como pilar del modo de dominación, hegemonía y control que volvía a desplegarse a escala continental. Con lo cual, a su vez, luego de la experiencia del Grupo de Río — sucesor del de Contadora— revelaría cómo, al paso de los años 80, las presiones estadounidenses irían quebrando, país por país, el carácter de aquella emersión latinoamericanista, hasta minar y doblegar a sus gobiernos y convertirlos en un Grupo inocuo.

La ofensiva neoliberal

En Estados Unidos, el período de la posguerra mantuvo temporalmente el legado político de Franklin D. Roosevelt, mientras el Reino Unido adoptó las reformas socioeconómicas del gobierno laborista de Clement Attlee, tendientes uno y otro a lo que se conoció como el Estado de Bienestar, afín a la filosofía política socialdemócrata. Eso cambió drásticamente con el viraje impuesto por los mandatos de derecha de Margaret Thatcher, en Londres (1978-1990), y de Ronald Reagan en Washington (1981-89). Ambos coincidieron sistemáticamente en los objetivos de achicar las facultades del Estado para intervenir en las políticas económicas y, en su lugar, darle todo el poder al mercado y la iniciativa privada, dejando en sus manos la asignación de recursos. Se bajaron los impuestos y redujeron los gastos sociales, dejó de haber compromiso del Estado con el bienestar social y se priorizó lograr la

eficiencia que aportase mayores dividendos. Se privatizaron las empresas del Estado, se redujo la influencia de los sindicatos y se dio fin a las políticas de pleno empleo, liberando a las empresas de las normas y costos por cesantía. La señora Thatcher, más educada e inteligente, y el presidente Reagan, con mayor carisma, impusieron ese programa entre sus aliados europeos y lo fijaron como norma en los organismos financieros internacionales. Su formulación doctrinaria se sistematizó en el llamado Consenso de Washington, de 1989.

Para justificar esas prácticas en Europa y Estados Unidos, la crítica de derecha a las políticas socialdemócratas predicó que éstas habían generado un sector público excesivo, burocratización y deficiente administración de la economía, gastos improductivos, como subsidiar grupos sociales “parasitarios” y pérdida de eficiencia y competitividad empresarial. Lo que avalaba el supuesto de que la gestión privada sería más eficaz que la administración estatal. El lanzamiento sincronizado y masivo de la doctrina neoliberal contra el cepalismo en América Latina se basó en estos mismos argumentos, con escasa aportación de sus predicadores locales. Aun así, esa invasión ideológica encontró débil resistencia intelectual y política, por razones propias de aquellos momentos. Ciertamente, según las diferentes realidades y expectativas de cada país, el cepalismo había contribuido al crecimiento económico y favorecido el desarrollo social latinoamericano, pero su legado había venido deteriorándose, sobre todo por la penetración de la política electoral y el favoritismo paternalista en la administración de las empresas y servicios estatales. Desde luego, requería revisión y depuración, reformas a su instrumentación legal y un nuevo impulso conceptual y ético. Pero eso no motivaba su radical destrucción, ni mucho menos el saqueo del patrimonio nacional de cada país.

El éxito de la ofensiva neoliberal en América Latina no provino de la pujanza de sus argumentos. Ocurrió durante un debilitamiento de la resistencia latinoamericana, cuando sus izquierdas tradicionales aún buscaban superar las disyuntivas intelectuales y políticas tras el derrumbe de la Unión Soviética, que por años perturbarían su capacidad de enfrentar esa ofensiva y movilizar contrapropuestas. Entre los pretextos para justificar el asalto neoliberal, figuró tanto la falta de recursos estatales para financiar el reequipamiento tecnológico y elevar la productividad de las empresas y servicios estatales, como la excusa de venderlas para obtener fondos con los cuales resolver la deuda externa y sanear las finanzas públicas. Pero, en concreto, el objetivo fue desatar la apropiación y saqueo de los recursos nacionales por los mayores postores extranjeros o locales. El hecho de que se apresuraran a tomar dichos bienes fue clara prueba de que éstos habían alcanzado un atrayente valor y potencial económico. La

invasión neoliberal dispuso del inmediato apoyo de los sectores conservadores, organizaciones empresariales y capas sociales más acomodadas. El remate del patrimonio nacional ocasionó por unos años prosperidad superficial, que dio pie a varias fantasías ideológicas y éxitos electorales de la derecha política. En Europa occidental y en Latinoamérica, entre no pocos partidos socialdemócratas o afines, se hizo moda “adaptarse” a la nueva ruta. Pero al paso de unos años, tras los devastadores efectos sociales del neoliberalismo y el fracaso de su modelo económico, ese desliz no sólo causó la corrupción ideológica y pérdida de identidad de la socialdemocracia. También su derrumbe político y electoral, al haber dejado de ser crítica del desastre neoliberal y escudo de la clase trabajadora.

Las secuelas del neoliberalismo son hartamente conocidas: polarización de la renta y de la sociedad, con el rápido enriquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento de las mayorías; pérdida masiva de puestos de trabajo, inseguridad laboral y social, marginación, desarraigo y grandes desplazamientos migratorios. Con eso, en pocos años pasaría a motivar, en cada país, una creciente ola de disgustos sociales, deterioros del sistema político preestablecido y reiteradas protestas sociales. Tras la crisis financiera de 2008, el propio capitalismo tuvo que poner freno a los excesos neoliberales y reconocer la necesidad de que el Estado y los organismos financieros internacionales restablecieran regulaciones al mercado. A escala hemisférica, la ola neoliberal desmanteló las organizaciones regionales de integración, o las vació de utilidad efectiva. El “panamericanismo”, como sistema hemisférico es, en esencia, una estructura de relaciones bilaterales que Estados Unidos hegemoniza por separado con cada país de la región. Por consiguiente, no es compatible con los proyectos autónomos de integración latinoamericana.

Se abusa de argumentar que el neoliberalismo fracasó, lo que es una verdad a medias. Si bien ello es cierto a nivel académico, como también en la mayor parte de los casos en la gestión de la economía y las políticas públicas, la verdad es que las empresas que fueron desnacionalizadas y el patrimonio público perdido no se han vuelto a recuperar. Los daños infligidos y los pillajes realizados no se revirtieron. Así como, generalmente, las estructuras, normas y medidas neoliberales implantadas en el área de las relaciones económicas internacionales siguen vigentes.

Aunque conceptual y éticamente descalabrado, el neoliberalismo persiste en tanto sigue arraigado en la “eficiente” amoralidad de las corporaciones transnacionales, así como en la ideología vigente en la jefatura de los organismos financieros internacionales, y en los reflejos de los líderes de las clases más enriquecidas y

sus servidores profesionales en cada país. Esto ocurre porque la ofensiva neoliberal también fue parte —y todavía lo es— de un proceso de reconstrucción ideológica y moral de la derecha, introducido durante la confusión y reordenamiento de las izquierdas y el debilitamiento de los Estados y empresas nacionales. Esto es, se implantó en un vacío donde el modo de pensar y el sentido común neoliberales invadieron sin gran resistencia la cultura política de cada país, durante lo que luego se conoció como “la década perdida” de los años 90. Aunque esos 10 años de auge de las políticas neoliberales remataron en el fracaso y crisis de su gestión económica y social, en el plano ideológico las nociones matrices de su lógica y apetito aún conservan influencia. Lo que nos dice que hoy una de las tareas más apremiantes de las izquierdas efectivas es reactualizar la cultura política latinoamericana.

El primer período progresista del siglo XXI

Hoy suele llamarse “progresista” al clima político que se extendió por Latinoamérica a inicios del siglo XXI, desde la primera elección de Hugo Chávez a finales de los años 90, hasta los primeros quince años —aproximadamente— del presente siglo. Período durante el cual, en diferentes circunstancias nacionales, organizaciones y personalidades provenientes de las izquierdas ganaron elecciones presidenciales y accedieron al gobierno en varios países de la región. Lo lograron proponiendo un proyecto social y moralmente esperanzador, pero sin expectativas más radicales de lo que la población y el contexto electoral de esos años ya podían asumir. Esa ola progresista brotó del extendido repudio que las políticas neoliberales se habían ganado entre los sectores populares y las capas medias de la mayoría de los países latinoamericanos. Venía de los efectos de la extrema explotación e inseguridad del trabajo, del incremento de la injusticia, la desigualdad y la pobreza, de la pérdida de calidad de vida, contrastantes con la ostensible corrupción y enriquecimiento ilícito de las élites que lucaban con dichas políticas. Ese malestar social propició elecciones ganadas, o casi ganadas, por candidatos provenientes de las izquierdas, gracias al voto de espontáneo rechazo a la situación existente, sin que esto significase que un nuevo desarrollo ideológico había prendido en las masas votantes. Este desarrollo todavía estaba por ser producido, compartido y prodigado por unas izquierdas a medio renovarse.

El modo en que estas personalidades y frentes de izquierda llegaron al Gobierno a través de elecciones merece tres precisiones. La primera, que esa protesta electoral de los pueblos expresó su repudio a las políticas y partidos tradicionales, pero no iniciaba una revolución; la segunda, que eso le permitió a estos grupos y personalidades acceder al Gobierno, pero no al Poder; y la tercera, que

llegaron ahí a través de comicios encuadrados en el marco constitucional e institucional preestablecido, que implica normas y estereotipos político-culturales propios de un sistema político diseñado para conservar el orden existente, no para cambiarlo. Por ejemplo, Lula da Silva fue electo y reelecto con la más categórica mayoría electoral obtenida por un candidato brasileño. Pero tuvo que gobernar con minoría en ambas cámaras del Congreso y entre los gobernadores y alcaldes. En la cima del éxito político, gobernó maniatado por el sistema preestablecido.

Con todo, ese primer progresismo en tres lustros de gestión produjo un legado continental extraordinario. Entre otras cosas dejó establecido que sí es posible realizar transformaciones por medios democráticos. Sus gobiernos recuperaron importantes cuotas de autodeterminación nacional y soberanía popular, ampliaron y robustecieron la ciudadanía y lograron fuertes reducciones de la pobreza, fortalecieron los derechos laborales, mejoraron la distribución de los ingresos, ampliaron los servicios sociales, especialmente los de educación y salud, y lograron progresos en la lucha contra las discriminaciones y la marginación, entre otras conquistas populares. Y en el plano latinoamericano e internacional, fortalecieron los organismos de unidad e integración regional que ya existían y ampliaron sus atribuciones —como en el caso del Mercosur—, además de crear nuevos organismos de mayor alcance y perspectivas, como la Unasur y la Celac. A la par, avanzaron en el esfuerzo por el multilateralismo y la equidad internacionales. Lo que volvió a demostrar que la mayor presencia e influencia del nacionalismo progresista y de las izquierdas en los gobiernos latinoamericanos, con el consiguiente aumento de la autodeterminación e independencia de sus países, incrementa el potencial regional de unidad, colaboración e integración.

No obstante, esos tres lustros también registraron un conjunto de debilidades. Sus protagonistas fueron generalmente solidarios, pero sin que sus países llegasen a concretar desarrollos subregionales complementarios, más generadores de sinergias. Entre otros déficits, su política económica no superó la herencia extractivista legada por los anteriores gobiernos liberales. En sus años, los precios de las materias primas o *commodities* estaban altos en el mercado internacional y eso permitió que una mayor extracción y venta de estos productos ayudara a financiar los programas de lucha contra el hambre y la pobreza, de educación y salud, así como las mejoras a otros servicios sociales, sin entrar en conflicto directo con las respectivas burguesías, al no decretar mayores impuestos y expropiaciones. Pero con esto dejaron de acometer la transformación necesaria de la economía, que permitiese procesar en cada país esas *commodities*. A la vez, al quedar en dependencia del precio foráneo de las materias primas para solventar esas inversiones sociales, al caer ese precio éstas resultaron



insostenibles. En otras palabras, aquel progresismo mitigó los más detestables efectos del capitalismo neocolonial y el subdesarrollo, pero le faltó decisión o capacidad para resolver sus causas estructurales. Entre tanto, en todo ese período la derecha económica conservó su poder organizativo, sus operadores y clientelas y, sobre todo, la influencia ideológica de su poder de comunicación y reinterpretación de los acontecimientos mediante su dominio de los medios de comunicación más influyentes.

Dicho progresismo padeció los efectos de un estilo político teñido de excesivo electoralismo. Al no ser gobiernos resultantes de una revolución, su gestión se dirigió a procurar apoyos electorales adicionales entre sectores y grupos que no necesariamente compartían las expectativas populares, lo que en varios casos llevó a adoptar alianzas y compromisos extraños a esas expectativas, a admitir concesiones en el combate al oportunismo y la corrupción, así como a debilitar la participación de los movimientos sociales en la elaboración de proyectos y decisiones. Semejante “realismo” induce un comportamiento demasiado medroso para sosegar al electorado de las capas medias y “centro” y evitar darle argumentos a la crítica mediática de derecha. Lo que al inicio se justificó como táctica, al hacerse reiterado constituyó un cambio de identidad. Con eso, al cabo de unos años tal progresismo sería víctima de sus omisiones éticas, hasta resultar derrotado en países donde antes tuvo éxito, ya no solo por la malicia de las derechas y sus medios ni por la coordinación regional de la inteligencia estadounidense, sino también por sus propias falencias. Porque éstas hicieron a ese progresismo más vulnerable frente a las maquinaciones enemigas, en tanto que esas conductas decepcionaron a mucha gente que demandaba una conducta ética y política más inequívoca. Ante la degradación de las alianzas políticas del partido torrijista, alguna vez el ex-presidente panameño Ricardo de la Espriella comentó que “más vale perder solos que ganar mal acompañados”. Se podía perder

el gobierno, pero no la perspectiva nacional-revolucionaria, que le daba fortaleza estratégica.

Lo que siguió es historia conocida. Con las sucesivas defenestraciones de gobiernos progresistas, ya sea a través de golpes militares, golpes parlamentarios, los llamados golpes “suaves” o por fracasos electorales, cambió el balance político continental. La renovada presencia mayoritaria de los gobiernos conservadores y filo estadounidenses tuvo inmediatas consecuencias contrarias al proceso de unidad e integración latinoamericanas. Entre ellas, la destrucción de la Unasur y el congelamiento de la Celac. El reinado de la nueva derecha ha sido bastante más que un simple retorno de los núcleos conservadores y de sus operadores y políticos al gobierno. Desde el inicio del pasado período progresista, la conducción de esa derecha buscó reactualizar sus métodos y formas de actuación ideológica y política. Incluso con copiosa asesoría internacional, como la ofrecida por las organizaciones internacionales de la derecha europea y norteamericana. Pero desde entonces esa renovación se enfocó en mucho más que volver al Gobierno y a la “normalidad” anterior al progresismo. La que hoy conocemos como *nueva derecha* busca lo que los norteamericanos llaman un *roll back* profundo, es decir, recuperar las prerrogativas económicas y políticas que las élites conservadoras habían retenido desde *antes* de la posguerra. Su propósito va más allá de revertir lo alcanzado por la democratización y por la justicia y equidad sociales en los años del progresismo. Se dirige a revertir las conquistas populares obtenidas luego de la Segunda Guerra mundial y aún antes, propósito que a su vez demanda un *nuevo ideologismo*, que incluye relanzar el empuje doctrinal del neoliberalismo, remozar el nacionalismo de derecha, las políticas racistas y contrarias a los inmigrantes, reciclar el fanatismo religioso, el machismo y la discriminación de las minorías sociales y la de grupos no tan minoritarios, como las mujeres, las comunidades rurales y los indígenas. A lo que agrega convocar una base social entre los sectores más angustiados por la crisis general, que anhelan obtener certezas y amparo, aunque sea a la sombra del autoritarismo. Lo que con nuevo maquillaje relanza un neofascismo del siglo XXI.

Pese a todo, lo que en Latinoamérica ahora tenemos a la vista es otra emersión de crisis económica y social, tanto del capitalismo neocolonial como de las opciones de sus derechas políticas. El impetuoso resurgimiento de su capacidad y avidez para retomar el poder, exhibidos desde la segunda década del siglo XXI, pronto ha desatado otra ola de daños, desengaños y protestas populares, que ya han puesto en entredicho a los más presuntuosos gobiernos de derecha. Aun así, el capitalismo neocolonial permanece activo y despliega técnicas y medios para competir en el ámbito subjetivo. No pocas oleadas de protestas populares

deflagran, conmocionan y al rato se desperdigan sin estructurar organización ni objetivos duraderos. En el seno de la pluralidad de grupos y territorios sociales de cada país, abundan motivos de irritación, pero demoran en cuajar propuestas y liderazgos que solidaricen su diversidad de expectativas, hasta aglutinar y sostener perspectivas de mayor alcance, como en su época el cardenismo de los años 30, el peronismo de los 40 o el fidelismo de los 50 del siglo pasado. ¿Cuánto han aprendido el progresismo y las izquierdas a partir del análisis de los 15 años de su pasada experiencia, para relanzar y superar sus aciertos sin repetir las falencias que les impidieron resistir a la muy previsible contraofensiva del poder imperial norteamericano y sus renovados aliados domésticos?

América Latina es un continente en disputa. Hay enormes intereses transnacionales y fuertes apetitos domésticos comprometidos con la situación reimplantada en los últimos años. Pero emergen sectores populares crecientemente indignados y nuevas formas de la izquierda —sobre todo de la izquierda social—, así como otras posibilidades de organización y movilización del descontento popular. Tanto la derecha ha aprendido a desarrollar medios para dominar el pensamiento de las multitudes, como la izquierda aprende nuevos modos de comunicarse y de persuadir y articular la diversidad de inconformidades sociales. No son pocas las indefiniciones e incógnitas que emergen en el camino del próximo período. Entre ellas, las circunstancias que pueden darse cuando lo peor de la oligarquía dominante se debilita en el control del poder, pero los sectores populares aún no reúnen las fuerzas e ideas necesarias para tomárselo. Situaciones de empate e incertidumbre que, al demorar en solucionarse, pueden ver la emersión de fenómenos monstruosos, como el fascismo en sus distintas modalidades. En el corto plazo, pasada la Covid-19, aún faltará enfrentar las formas que tomará la crisis económica que ya nos atacaba desde antes de la pandemia, y que ésta aceleró y agravó. Se habla frívolamente de ir a una “nueva normalidad”. ¿Pero cabe llamar “normal” la situación que padecíamos antes del Covid-19, la de sobrellevar la decadencia del neocolonialismo neoliberal? Esta no sería una normalidad a la que valga la pena “mejorar”; la cuestión es remplazarla por otro modo de vivir.

Estamos sobre la rampa inicial de nuevos tiempos, donde toca replantearse los objetivos, métodos y formas de las alternativas sociales. Eso exige idear y probar nuevas formas de participaciones y alianzas. Formas de organización y movilización revolucionaria y democrática de todo el pueblo, que demandan acoplarse a las actuales y próximas expectativas populares, generacionales y cantonales, e idear sus correspondientes estrategias. Cabe a las izquierdas nacionales decidir entre ser observadores críticos y escépticos o sumar propuestas que el grueso de

la gente pueda hacer suyas. No tiene sentido —y sería decepcionante— entender el periodo que ahora empieza como mera repetición de los mecanismos de la pasada ola progresista. Entre aquella y la que viene, hay la acumulación suficiente para nutrir un salto mayor. Como bien lo resume Guillermo Castro Herrera: “Nuestra América —toda ella— está ingresando en una fase cualitativamente nueva, la disyuntiva entre la revolución democrática y la contrarrevolución autoritaria”.

Las opciones

Desde mediados del siglo XX sabemos que en el mundo del subdesarrollo sí cabe derrotar al colonialismo y a las formas más brutales del neocolonialismo. Pero también consta que no es posible impulsar y sostener el desarrollo prescindiendo de todos los mecanismos del mercado. Como, asimismo, que sí es factible controlar los instrumentos fundamentales de la economía nacional y orientarlos en consonancia con los mejores intereses populares. Sin embargo, para luchar eficazmente por la justicia y contra las desigualdades y la pobreza, es indispensable concretar tanto al progresismo como al socialismo según las respectivas realidades, necesidades y posibilidades de cada sociedad nacional. Ningún modelo es bueno si no es económica y socialmente sostenible. Y no es posible impulsar un desarrollo progresista ni socialista sin fortalecer las adhesiones sociales necesarias, con la apertura y el debate plural e inclusivo que eso requiere, puesto que ni el socialismo ni el desarrollo son compatibles con el monolitismo, el hegemonismo, ni la mera repetición de pasados modelos. Pero, ante todo, es imprescindible tener presente que el mundo del neocolonialismo y el subdesarrollo es un mundo regido y re-producido por las potencias explotadoras. Por ello, en Latinoamérica las luchas por la justicia, contra el atraso, la explotación y la marginación, por la equidad y el desarrollo material y espiritual, exigen recuperar la soberanía y autodeterminación. Para los latinoamericanos esas luchas empiezan por ser patrióticas y nacional-liberadoras. Y se fortalecen en el camino de hacerse naciones complementarias y solidarias para desarrollar sinergias. Para hacer efectiva esa antigua posibilidad y anhelo, la decisión está de nuevo en su hora crucial, la de crear. Y como advierte el primer párrafo de estas páginas, el cambio no puede depender de nadie más que de nosotros. ☒

Nils Castro (Panamá, 1937). Catedrático, ensayista y diplomático panameño. Fue asesor del general Omar Torrijos y de presidentes y cancilleres de su país. Es autor de estudios sobre ideología y cultura en América Latina, y en los últimos años se ha dedicado principalmente al análisis de la coyuntura política en los países del Hemisferio. Entre sus obras destacan *Estructuralismo y marxismo* (junto con Henri Lefebvre, Adolfo Sánchez Vázquez y Romano Lupérini, 1970), *Las izquierdas latinoamericanas: observaciones a una trayectoria* (2005) y *Las izquierdas latinoamericanas en tiempos de crear* (2012). Su ensayo *La brecha por llenar* mereció en Cuba el Premio *Pensar a Contracorriente*. Fue embajador de Panamá en México.